

LOS FALSOS ERRORES

SE nos está llevando paso a paso hacia una semidemocracia —o semiautocracia— de corte eminentemente burgués y acentuadamente conservador. Difícilmente, en esta primera fase, se va a pasar de ahí. Hay que pensar que el Jefe del Estado querría ir más allá, incluso el actual Gobierno pretendería añadir datos de mayor formalidad democrática a su leve reforma, según las palabras que repiten frecuentemente sus miembros. Pero el conjunto de grandes poderes instalados en el país no permite más. El Gobierno no tiene la capacidad de transformar esas esferas de poder. Habrá que atribuir a ellas una serie de sucesos de la última semana: desde una serie de detenciones, hasta la sonora, espectacular suspensión del Congreso del PSOE. Probablemente las detenciones practicadas tienen un apoyo en la actual legalidad: las mismas personas podrían haber sido detenidas hace uno, dos o tres meses. La elección de este momento indica un endurecimiento en las actitudes de tolerancia. En ese sentido está la suspensión —una prohibición matizada, irresoluta— del Congreso de los socialistas.

ES curioso cómo, con respecto a este último hecho, la mayor parte de los órganos de expresión insisten en su opinión de que se trata de un error, de una equivocación del Gobierno. Como si el Gobierno no supiera lo que pierde con una actuación semejante, con otras actuaciones —como la de no resolver los problemas del terrorismo de derechas, principalmente en el País Vasco— y con otras omisiones. El error de la prohibición del Congreso del PSOE consiste esencialmente en que se mina la credibilidad democrática del Gobierno en el interior y en el exterior: en el interior, porque se trata de un partido moderado, con adeptos en clases sociales que no son solamente las de los trabajadores; en el exterior, porque la Internacional Socialista tiene mucha fuerza en varios Gobiernos y en todos los Parlamentos de Europa, y no acaba de entender cómo se puede ir conduciendo el país hacia una democracia formal y, al mismo tiempo, impedir la libre formación de los partidos, la discusión en su seno de las ten-

dencias y las líneas, la elección de las Juntas Directivas. Explicarle al Gobierno que ha cometido un error puede ser fruto, principalmente, de la soberbia periodística, del deseo final de que este Gobierno "lo haga bien" o de informar a los lectores de lo que se supone un fallo. Pero, ¿cómo no van a saber el presidente del Gobierno y sus ministros, especialmente el de Asuntos Exteriores, lo que supone esa prohibición?

COMO saben perfectamente el destrozo continuo que se está haciendo de las libertades políticas en el país por la vía de las limitaciones —o supresiones— de actos, reuniones, del uso de la televisión y la radio. Mientras todo ello está al servicio de una derecha ultraconservadora, como la que acaba de formarse, la llamada Alianza Popular. También sabe el Gobierno que, a plazo inmediato —en el plazo electoral que él mismo se ha fi-

jado—, tiene mucho más que temer de esta derecha, incrustada ya en la Administración, en las Cortes, que de una izquierda vacilante y desunida. Tiene que temer de esa derecha conservadora y cerrada que le hunda su proyecto de Ley de Reforma en las actuales Cortes, que lo transforme en una nueva ordenación de la democracia orgánica que se deseaba ya desaparecida, que llegue a incorporar las sugerencias hechas en el Consejo Nacional. Y que, tras lo que quede de esa reforma, se quede con el poder visible —ya tiene el invisible— en unas elecciones donde, por su falta de medios y sus limitaciones de legalidad, van a tener muy poco que hacer el centro —real— y la izquierda. Las presiones que el Gobierno trata de ejercer sobre los procuradores, por muy diversos medios, para que aprueben su reforma son demostrativas de su falta de fuerza frente a esos poderes, a los que ha tenido que

